

gubernamentales y participación social, entre el capital de riesgo y su acción promocional pero también tutelar por el Estado, se impone como necesaria.

Lo importante por ahora es que en mi país ya se sabe que no basta con el funcionamiento del mercado para lograr un desarrollo sostenible.

## Brasil

Roberto SEGRE (corresponsal)

Henri ACSSELRAD (crónica).

Profesor del IPPUR (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional)  
Universidad Federal de Rio de Janeiro

### SEQUIÁS, INCENDIOS Y CAPITALES VOLÁTILES EN BRASIL

El presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso, cuya profunda erudición le permite establecer frecuentes asociaciones metafóricas, aprovechó las conmemoraciones del «Día del Árbol», para incursionar en las relaciones existentes entre globalización económica y ecológica (1). En realidad, buscaba una repercusión en el exterior que sensibilizara a sus interlocutores a nivel mundial con los objetivos que él llama de «globalización solidaria», evocando también motivaciones ecológicas con el fin de obtener recursos económicos internacionales. Pero el presidente olvidó señalar que también en el plano interno, globalización y ecología poseen fuertes interconexiones. Al contrario de lo que podría parecer, las condiciones ambientales de vida de la población brasileña están intrincadas en la red de la especulación global.

Pero, cuál puede ser la relación entre la fuga de dólares y la crisis de las reservas de divisas con la sequía en el Nordeste? Qué factores asociarían las bajas en las Bolsas de Valores con los incendios de los bosques de Rondônia? Trataré de demostrar que los vínculos resultan mayores que los supuestos en ingeniosas metáforas, como la de una fuente de reservas cambiales que se seca o la de una especulación financiera que se inflama. Condicionantes más profundos articulan con una lógica implacable el espacio virtual de la circulación acelerada de los capitales de corto plazo, al mundo más palpable

del desempleo, de la crisis social y de la degradación de los recursos de base; en particular aquellos provenientes de la agricultura familiar y de las poblaciones extractivas latinoamericanas.

Que el país carece de una política ambiental coherente, es reconocido también por algunos miembros del propio gobierno. Más exigentes resultan los movimientos ambientalistas que denuncian la inexistencia de «políticas públicas sustentables». En un reciente manifiesto — «Por un Compromiso con las Políticas Sustentables» —, quince líderes de la causa ambiental señalaban «la inexistencia de incentivos financieros para la conservación ambiental y para los proyectos de desarrollo sustentable», y la ausencia de la «articulación necesaria entre los sectores económico, social y ambiental, establecida en la Agenda 21». Por lo tanto, reivindican del gobierno la adopción de «una verdadera política de desarrollo sustentable que articule la política ambiental con los niveles de la planificación y la economía» (2). Sin embargo, pese a estas percepciones colectivas, hasta ahora no se ha conseguido evidenciar cuáles son las motivaciones más profundas que han paralizado, más allá de la actitud descomprometida de los gobernantes, cualquier posibilidad del Estado de desarrollar una política ambiental, o aún con mayor razón, de llevar adelante iniciativas económicas y territoriales que contemplen la dimensión ambiental del desarrollo.

Algunos analistas llegarían aún más lejos:

(1) Cf. *Jornal do Brasil*, 22.09.98. Rio de Janeiro: 3

(2) Cf. *Fofo, Seca, Enchente, congestionamento urbano para*

*onda vai a segurança ambiental no Brasil?*, mimeo, Rio de Janeiro, 23.05.98.

como la fuerza del Estado se refleja en su capacidad de controlar la moneda; al optar por el llamado «anclaje cambial» intentando mantener la paridad de la moneda nacional con el dólar norteamericano, al mismo tiempo perdió autonomía en sus decisiones. La política de estabilización monetaria que se mantuvo en vigor hasta enero de 1999, volvióse prisionera de los capitales especulativos de corto plazo, condicionando al Estado a someterse a la moneda dominante. Al perder su poder regulador sobre el movimiento de mercancías y de capitales, el Estado intentó ejercer el escaso poder sobrante para atraer capitales hacia las áreas en las cuales todavía conservaba alguna autonomía: la promesa de exención fiscal; el control salarial y la desregularización ambiental.

Las manifestaciones evidentes de este descontrol aparecen en la falta de políticas concretas para la prevención de incendios en los bosques de Roraima — vinculadas a la libertad de acción otorgada a los grandes latifundistas agropecuarios y a las operaciones especulativas en la región amazónica —; y en la total carencia de una acción anticipadora que evitase la crisis alimenticia que se desató en el Nordeste brasileño a raíz de la inexorable y previsible sequía ocurrida en 1998. Resultan claros ejemplos emblemáticos de la «decadencia de las políticas públicas», en las cuales, propuestas que aspiran a ser reguladoras, como aquellas contenidas en la Agenda-21, son anuladas por un proceso que podríamos llamar de «despolitización de las prácticas de gobierno» (3).

Queda evidenciado que la función del Estado para el gobierno actual quedó resumida y concentrada en la acción monotemática dirigida a la estabilidad monetaria a través de los controles de las tasas establecidas para el cambio de divisas y los intereses comerciales. Enunciado ratificado por el politólogo José Luis Fiori, al decir: «El esquema rígido de la política deflacionaria y el riesgo de la desestabilización especulativa eliminaron la posibilidad de concretar cualquier iniciativa pública: la salud del pueblo depende de la salud de los bancos y no de las inversiones dirigidas a la salud».

Al mismo tiempo es lícito afirmar que para el actual gobierno, «la sostenibilidad del medio ambiente depende de la sostenibilidad de los bancos». O sea, con el estrechamiento del sector público y de su capacidad de maniobrar políticamente, el mercado es quien gobierna el medio ambiente: la explotación depredatoria de los bosques; la contaminación por los

derrames clandestinos de desechos en ríos y bahías; la creciente exportación de los recursos naturales y la energía barata para el mercado global. Pero el mercado se ha demostrado persistentemente incapaz de regular la complejidad de los procesos socioecológicos, limitándose a reducir cada porción del espacio al valor económico y funcional atribuido por los actores centrales de la reestructuración global.

En este contexto, la «política ambiental» del gobierno parece tener como simple objetivo el de funcionalizar el espacio de acuerdo a la siguiente clasificación:

- a) regiones dotadas de vocación «natural» para su inserción en el mercado global, serán consideradas como una «naturaleza ordinaria», disponible a los apetitos económicos más inmediatos;
- b) área ricas en recursos genéticos serán consideradas como una «naturaleza preservable», o sea como islas protegidas. En este caso se trata de preservar las reservas disponibles para usos futuros: biodiversidad y recursos genéticos. Por el contrario, el Nordeste evidencia un enorme vacío de proyectos infraestructurales capaces de articular la región al resto del país, ya que el programa de inversiones estatales prioriza los vínculos con determinadas porciones dinámicas del territorio con los mercados, ocurriendo lo que, en términos de la economista Tania Bacelar, se define de la siguiente manera: «El mercado mundial impone, el gobierno acata y el territorio se fragmenta» (4).

En 1998 la región del Nordeste brasileño vivió una sequía comparable a la que ocurrió en 1983, a pesar del anticipado vaticinio que gracias a su alta tecnología, alertó el Centro de Pesquisas do Tempo e Estudos Climáticos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ello ocurrió porque el modelo gubernamental de inserción pasiva en la globalización supone — como afirmó claramente Roberto Campos, diputado conservador y ex-Ministro de la dictadura, al querer extraer lecciones positivas de la crisis rusa —, que «el desarrollo económico no depende de los recursos naturales», de la misma forma que «tampoco la educación es suficiente sin los organismos de mercado». O sea, para el pensamiento neoliberal dominante, el desarrollo es reducido a un simple subproducto que solo se

(3) FIORI, J. L. (1995): «A governabilidade Democrática na Nova Ordem Econômica» en *Novos Estudos Cebrap*, 43, septiembre: 157-72, San Pablo.

(4) BACELAR, Tania (1997): «Fragmentação e isolamento do Nordeste no anti-plano de Metas» en *Jornal dos Economistas*, 103, noviembre 1992, Rio de Janeiro.

define por «la plena vigencia de los mecanismos del mercado», aunque ello afecte eventualmente las escalas asumidas como subsidiarias del medio ambiente, la educación, la salud, etc.

«Desarrollar», en esta acepción significa simplemente impedir que inversionistas y especuladores, en la metáfora irónicamente ecológica del senador Campos «se desencadenen como una estampida de bueyes», demostrando «coraje de carnero y velocidad de liebre» (5). En

resumen, ante los ojos perplejos de los brasileños, se acelera la degradación de la salud y de la educación que genera el mercado, causante a su vez de una política ambiental que se manifestó en las inclementes sequías y los devastadores incendios que en 1998 afectaron extensas regiones forestales del país.

*Traducción del portugués, Roberto Segre*

## Estados Unidos

Thomas F. GLICK

*Departamento de Historia, Universidad de Boston (Estados Unidos)*

### ESTADOS UNIDOS: LAS POSTRIMERÍAS DEL 98: CUBA Y SANTO DOMINGO (Y II)

A l contrario que en el programa de «colonización profunda» de las Islas Filipinas tras la Guerra Hispanoamericana de 1898 que describía en una crónica anterior, las dos intervenciones en Cuba se concentraron preferentemente en los problemas de infraestructura, comunicaciones, salud pública, y educación. Después de la Guerra, el presidente McKinley articuló un programa de objetivos muy generales: tomar medidas para asegurar el orden civil y la observancia de las obligaciones internacionales (estas obligaciones se referían, en su mayor parte, a deudas y contratos comerciales puntos claves de la «diplomacia del dólar».)

Durante la primera intervención en Cuba (1899-1902) el programa se cuajó durante el gobierno del segundo Gobernador, el general Leonard Wood (diciembre de 1899 a mayo de 1902) quien implantó una nueva ley de obras públicas estableciendo un Ministerio de Obras Públicas. En palabras del mismo Wood, «El trabajo principal del Departamento era la construcción de caminos y puentes con el fin de abrir conexiones con los ricos distritos agrícolas, mediante transporte tanto terrestres como marítimos; la mejora de puertos y faros, la

construcción de escuelas y la rehabilitación de edificios públicos.»

Es de señalar que la educación fue considerada un elemento infraestructural más. La administración militar estableció 3.800 escuelas, con una fuerte inversión (\$750.000) en pupitres, pizarras, y libros. El sistema de educación pública fue reorganizada según la ley del estado de Ohio, dirigido por un pedagogo visionario, Wilson Gill, que quería reorganizar las escuelas cubanas como «ciudades en miniatura.» Al mismo tiempo, Wood introdujo el principio de auto-gobierno municipal, necesario para poner en marcha la reforma de la educación pública, ya que en Estados Unidos las escuelas públicas fueron tradicionalmente regidas por los municipios, y no por administración central. Wood también construyó nuevos hospitales, pero su mayor impronta en la salud pública fue la famosa campaña contra la fiebre amarilla, llevada a cabo por un equipo binacional incluyendo a Walter Reed y Carlos J. Finlay. (No entraré aquí en las polémicas sobre las contribuciones respectivas de Reed y Finlay; simplemente, hago notar el interés de Wood en organizar una campaña sería la cual, de hecho, conducía al control del endemismo.)

El programa de comunicaciones fue llevado a cabo durante la segunda intervención (1906-1909) bajo el Gobierno de Charles E. Magoon, abogado de la «División de Asuntos Insulares» del Departamento de Estado. Magoon se ocupó en primer lugar de la construcción de carreteras, completando y extendiendo el proyecto desarrollado por el Gobierno intermedio de

(5) CAMPOS, Roberto «A crise Russa e nos» *Folha de São Paulo*, 20.09.98:4, San Pablo.